

VI. CONCLUSIONES

Durante muchas décadas el proceso penal mexicano se sustentó en el modelo inquisitorio, a través del cual se podía privar de la libertad al ciudadano para someterlo a proceso con la simple existencia de sospechas. Dicho abuso del *ius puniendi* se trató de evitar en 1993 al requerir que el Ministerio Público probara plenamente todos los elementos del tipo penal y de la probable responsabilidad para poder solicitar el juez la orden de aprehensión o para que el juez dictara el auto de formal prisión con sujeción a proceso. Sin embargo, las dificultades de probar previamente los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad dieron lugar a impunidades (por evasión o procesos penales fallidos) que se trataron de evitar con nuevas reformas constitucionales y procesales en 1999 a fin de reducir el grado de prueba para poder detener a una persona sospechosa de la comisión de un delito, con lo cual se volvió al abuso del *ius puniendi* al privar de la libertad al ciudadano de manera anticipada a la condena.

En 2006, el legislador de Chihuahua dispuso las bases constitucionales y aprobó nuevas leyes para un nuevo sistema integral de justicia penal. Así, el nuevo Código de Procedimientos Penales tuvo como directriz el proceso penal justo en el que se sancione a los delincuentes, salvaguardando los derechos de los inocentes; para tal efecto se adoptó el proceso penal acusatorio sustentado en el juicio oral, con el cual se salvaguarda

la garantía de la libertad del individuo sospechoso de cometer un delito. De esta guisa, la garantía de libertad se hace valer durante todo el proceso penal, de tal suerte que para dictar una orden de aprehensión el juez no sólo deberá tener pruebas plenas que le lleven a la convicción de que el sujeto cometió el delito, sino también de que la comparecencia del imputado ante el juez se pudiere ver demorada o dificultada. Por ello, se puede sostener que en el estado de Chihuahua la posibilidad de evasión del indiciado o imputado pasa a ser el criterio fundamental para contravenir la garantía de libertad y privar de la libertad al individuo, salvo los casos de flagrancia (art. 165 del CPPCH) y los de prisión preventiva previstos en el párrafo segundo del art. 173 del CPPCH.

En consecuencia, con el nuevo proceso penal acusatorio, la libertad se erige como una verdadera garantía constitucional, conforme a la cual el sospechoso de haber cometido un delito podrá ser vinculado a proceso penal aplicando medidas precautorias que no impliquen la restricción de dicha garantía, con lo cual no sólo se garantiza su libertad de tránsito sino también considerarlo y tratarlo como inocente (libre) durante el proceso penal, y sólo proceder a anular su garantía hasta que se le demuestre plenamente (*onus probandi*) en el juicio oral que cometió el delito (*in dubio pro reo*) del cual se le acusó.

La garantía y principios antes señalados constituyen las bases del nuevo proceso penal acusatorio incorporado en 2008 a la CPEUM, los cuales ya están plasmados en el CPPCH, que no sólo se adelantó a los nuevos designios de la carta magna sino que también obedece a los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, con todo lo cual Chihuahua se perfiló desde hace más de dos años hacia un sistema de justicia penal propio de un Estado social y democrático de derecho. ¡Enhorabuena!